

PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo nuevo al **Proyecto de Ley No. 102 de 2025 Cámara – 083 de 2025 Senado: “POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026”**, el cual quedará así:

ARTÍCULO NUEVO. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. En la ejecución del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal correspondiente, las entidades del orden nacional y territorial que adelanten procesos de contratación para obras civiles, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario deberán garantizar que, como mínimo, el treinta por ciento (30%) del valor de los materiales de construcción provenga de productos que cuenten con certificación del Sello Ambiental Colombiano (SAC) o con otras certificaciones ambientales reconocidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo 1°. En los casos en que se verifique la inexistencia o insuficiente oferta local o regional de materiales certificados, la entidad contratante podrá justificar la excepción, informando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Parágrafo 2°. Las entidades contratantes deberán incorporar en los pliegos de condiciones y contratos los criterios técnicos de sostenibilidad definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a las guías y fichas técnicas vigentes.



Parágrafo 3°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptará las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la aplicación de lo dispuesto en este artículo, sin que implique un aumento del gasto autorizado en la presente ley.

Parágrafo 4°. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría General de la República realizarán seguimiento y verificación al cumplimiento de esta disposición, en el marco de la estrategia nacional de compras públicas sostenibles, los compromisos de la Agenda 2030 (ODS 12.7) y las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Atentamente,

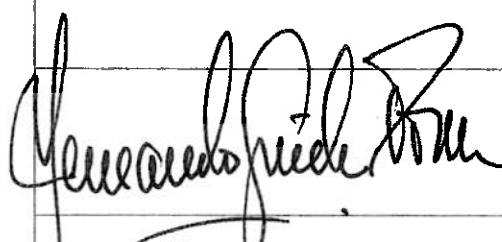
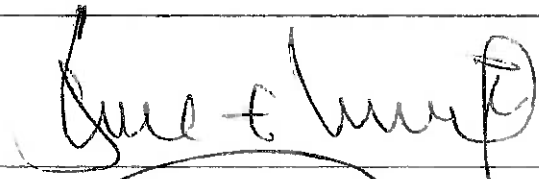
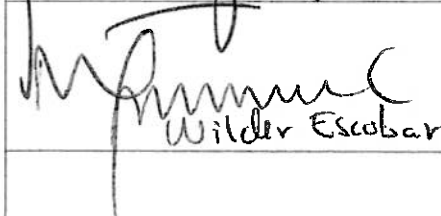
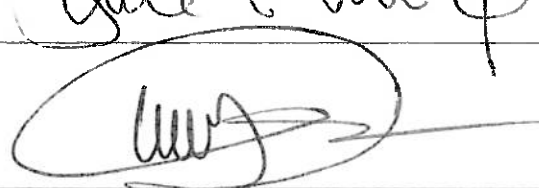
Milene Jarava Díaz
Milene Jarava Díaz

Representante a la Cámara por Sucre

	
COMISIÓN CUARTA	
CÁMARA DE REPRESENTANTES	
Recibido Por:	
Fecha:	2 - SEPTIEMBRE / 2025
Hora:	4:21 PM
Asesor(a) de Legitimación:	165

📍 Edificio Nuevo Del Congreso, Cra 7 N° 8-68, oficina 406 B, Bogotá, Colombia

☎ (+57) (601) 8770720 Ext. 3621 - 3060 ✉ milene.jarava@camara.gov.co

	
 Wilder Escobar	

Justificación

La presente proposición tiene como propósito consolidar un marco presupuestal que oriente las contrataciones públicas hacia la sostenibilidad ambiental, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

En primer lugar, la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Estatal) faculta a las entidades públicas a exigir calidad en los bienes y servicios de acuerdo con normas técnicas. A su vez, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, impulsada por el Ministerio de Ambiente, establece la necesidad de incorporar criterios ambientales en los procesos de contratación pública. Instrumentos como el Sello Ambiental Colombiano (SAC) y las guías y fichas técnicas elaboradas por Colombia Compra Eficiente constituyen referentes obligados para garantizar que los bienes y materiales adquiridos tengan un menor impacto ambiental.

En segundo lugar, esta iniciativa se articula con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, específicamente con el ODS 12 'Producción y Consumo Responsables', y con la Meta 12.7, que establece la obligación de promover prácticas de adquisición pública sostenibles. De igual manera, contribuye al ODS 11 'Ciudades y Comunidades Sostenibles', dado que la vivienda de interés social y prioritario constituye un sector estratégico para garantizar hábitats dignos, resilientes y respetuosos con el medio ambiente.

La incorporación obligatoria de materiales certificados ambientalmente en las obras públicas tiene un doble propósito: 1) Mitigar el cambio climático, reduciendo la huella de carbono y el impacto ambiental de la construcción. 2) Impulsar la innovación en la industria nacional, promoviendo que más empresas adopten estándares ambientales y accedan a nuevos mercados sostenibles.

Finalmente, esta disposición no implica un aumento del gasto público, sino una reorientación inteligente y responsable de los recursos ya autorizados, garantizando eficiencia en el uso del presupuesto y generando impactos positivos en la salud, la competitividad y la sostenibilidad del país.

Por todo lo anterior, se propone a la Honorable Cámara de Representantes aprobar el presente artículo para ser incorporado en la Ley de Presupuesto General de la Nación.